

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN



SALA LABORAL
Acta 006

Medellín, veintinueve (29) de enero de dos mil veintiuno (2021)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelven los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de las partes, en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **MARÍA GABRIELA PÉREZ** contra **COLFONDOS S.A.** y la **NACIÓN-MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**.

ANTECEDENTES

Pretensiones

La actora solicita que se declare que le asiste derecho a la garantía de pensión mínima desde el **19 de marzo de 2010** cuando cumplió 57 años de edad, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, y en subsidio, la indexación (fl.4).

Hechos

La demandante nació el **19 de marzo de 1953** y cotizó al régimen de prima media administrado por el **ISS** hoy **Colpensiones** un total de **756,14 semanas** entre el mes de agosto de 1978 y el mes de febrero de 2001.

En el mes **de marzo de 2001** se trasladó al RAIS administrado por **Colfondos S.A.**

El **28 de junio de 2011**, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, prestación que fue negada por **Colfondos S.A.** por no contar con el

capital suficiente para la financiación de la prestación, por lo que se procedió a estudiar la posibilidad del reconocimiento de la garantía de pensión mínima.

El **28 de noviembre de 2016**, **Colfondos S.A.** le comunicó que no cumplía con los requisitos para acceder a la garantía de pensión mínima, toda vez que, acreditaba 1098 semanas en toda su vida laboral.

No obstante, una vez revisada la historia laboral de la actora se encuentra que en toda su vida laboral cotizó **1247,29 semanas**, tiempo que resulta suficiente para acceder a la garantía de pensión mínima, situación que fue puesta en conocimiento de **Colfondos S.A.** que a la fecha no ha reconocido la pensión.

Contestación Colfondos S.A.

La administradora de pensiones demandada a través de apoderada, indicó que no le consta el número de semanas cotizadas por la actora al **ISS** hoy **Colpensiones**, precisó que la fecha de afiliación de la actora fue el **1 de abril de 2001**.

Precisa que el día **28 de junio de 2011** la actora solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez, prestación que fue negada por no contar con el capital necesario. En ese orden, se procedió a remitir solicitud al **Ministerio de Hacienda y Crédito Público** para tramitar la garantía de pensión mínima consagrada en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993.

Esta solicitud no fue acogida por el **Ministerio de Hacienda y Crédito Público** por encontrar que se presentaban inconsistencias en la historia laboral, por lo que en comunicación del **25 de junio de 2013** se rechazó la solicitud de la actora por no haberse radicado de forma completa.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: inexistencia de la obligación, falta de causa para demandar, prescripción, compensación, inexistencia de los requisitos exigidos, falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe, compensación y pago, enriquecimiento sin causa, incompatibilidad entre indexación e intereses moratorios y mala fe de la demandante (fls.88/118).

Contestación Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Esta entidad dio respuesta a través de apoderado, manifestando que esa entidad se encuentra imposibilitada para para proseguir con los trámites de una eventual garantía de pensión mínima, por cuanto **Colfondos S.A.** no ha adelantado los trámites para la emisión y redención del bono pensional

complementario, porque la demandante no ha aprobado la última liquidación provisional que debió presentársele.

Explica que mediante archivo laboral masivo remitido por **Colpensiones** se indicó que la actora contaba con 647 semanas de cotización, por lo que con esta información se procedió a liquidar el bono, y que luego de emitido y liquidado el mismo en el año 2013, se evidenció que la señora **María Gabriela Pérez** contaba con 761 semanas, siendo necesario proceder a emitir un bono pensional complementario.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: inexistencia de la obligación y buena fe (fls.220/228).

Sentencia de Primera Instancia

El Juez Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín en sentencia del **10 de junio de 2019**, condenó a **Colfondos S.A.** a notificar a la demandante, la liquidación provisional del bono pensional complementario realizado por la Oficina de Bonos Pensionales del **Ministerio de Hacienda y Crédito Público** y en caso de su aprobación, solicitar a la OBP la emisión y redención de dicho bono.

Luego de agotado este trámite, **ordenó** a la AFP demandada comenzar a pagar la garantía de pensión mínima de la pensión de vejez a partir de la última cotización al sistema de pensiones, la que en todo caso deberá ser posterior al mes de mayo de 2014, autorizando a **Colfondos S.A.** a descontar los aportes con destino al sistema de seguridad social en salud.

Finalmente, **absolvió** a **Colfondos S.A.** del pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y le impuso la obligación de indexar las mesadas pensionales adeudadas.

Esta decisión fue recurrida por el apoderado de la demandante y la representante judicial de **Colfondos S.A.** en los siguientes términos:

Recurso de apelación parte actora

Solicita el apoderado de la demandante que se **modifique** la fecha del reconocimiento de la pensión de vejez, toda vez que, con las pruebas aportadas se puede establecer el momento a partir del cual es exigible el pago de la garantía de pensión mínima, sin que en este punto sea relevante lo declarado por la demandante, debiendo ser reconocida la prestación desde el **1 de junio de 2014**.

En lo referente al pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, solicita que se **revoque** la decisión de primera instancia y en su lugar se acceda a esta prestación, toda vez que crearon una dilación para no reconocer una pensión aplicando una norma que desde el año 2011 se encontraba declarada nula por parte del Consejo de Estado.

Recurso de apelación Colfondos S.A.

Solicita la apoderada de la AFP demandada que se **revoque** la decisión de primera instancia, puesto que, el juez a-quo confunde la expedición del bono pensional complementario con el pago de una garantía de pensión mínima, y es que en este caso se debe evaluar por **Colfondos S.A.** si con el valor del bono complementario la actora alcanza a financiar la pensión de vejez y solo en el evento de que no sea posible, se procederá a solicitar el reconocimiento de la garantía de pensión mínima.

Así mismo, no está demostrado que la actora cumpla con el número de semanas necesario para acceder a la garantía de pensión mínima, en atención a que el bono complementario liquidado por el **Ministerio de Hacienda y Crédito Público** es provisional y ello implica que esta situación aún no se ha consolidado no pudiéndose ordenar el reconocimiento de la prestación.

Anota que no se puede desconocer que la entidad responsable de reconocer la garantía de pensión mínima es el **Ministerio de Hacienda y Crédito Público** y no a **Colfondos S.A.** y que la actora debe de conformidad con el Decreto 832 de 1996 manifestar que los ingresos que devengaba para la fecha de la solicitud pensional le permitían acceder a esta garantía pensional.

En lo referente al **pago del retroactivo** indica que no es posible, toda vez que en el régimen de ahorro individual solo se puede reconocer la pensión una vez aprobado por parte del **Ministerio de Hacienda y Crédito Público** el pago de la garantía de la pensión mínima.

Respecto del pago de la indexación, manifiesta su inconformidad, puesto que las mesadas pensionales se actualizan anualmente sin que haya lugar a otro criterio de actuación.

Finalmente, recurre la imposición de la **condena en costas** por considerar que esa entidad actuó dentro de sus competencias legales, no ocurriendo lo mismo con el **Ministerio de Hacienda y Crédito Público**.

Alegatos de conclusión

Corrido el término de traslado consagrado en el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, la apoderada de **Colfondos S.A.** presentó alegatos de conclusión en los que indicó que las AFP dentro del sistema pensional cumplen una actividad de medio consistente en realizar las gestiones para tendientes a la consolidación del bono pensional, pero bajo ninguna circunstancia les corresponde su emisión, reconocimiento y pago el cual tratándose de la Garantía de la Pensión Mínima es una competencia exclusiva de la OBP del **Ministerio de Hacienda y Crédito Público.**

En el anterior orden, solo a partir del cumplimiento de la Nación de sus responsabilidades en lo referente a la emisión del bono es posible conocer el tiempo con que cuenta la demandante y solo desde ese momento es posible para la administradora de pensiones verificar si se cumplen los requisitos para la Garantía de Pensión Mínima, lo que en el presente caso no se ha realizado por lo que no se cumplen las condiciones para imponer una condena a cargo de **Colfondos S.A.** como de forma errónea lo concluyó el juez de primera instancia.

Problema Jurídico

Los problemas jurídicos a resolver en esta instancia de conformidad con los recursos interpuestos, serán: (i) Determinar si la señora **María Gabriela Pérez** tiene derecho a disfrutar de la pensión de vejez, en virtud de la garantía de pensión mínima, y en caso de ser afirmativo (ii) establecer la fecha a partir de la cual procede el reconocimiento, (iii) obligatoriedad de los aportes en salud a cargo de los pensionados, (iv) si proceden los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, o en su lugar (iv) la indexación de las condenas.

CONSIDERACIONES

Antes de resolver, considera la Sala importante hacer las siguientes precisiones de conformidad con la prueba obrante en el expediente:

1. La señora **María Gabriela Pérez** nació el **19 de marzo de 1953** (fl.12).
2. Conforme se observa en la Historia Laboral emitida por **Colpensiones**, la señora **Pérez** cotizó entre el **8 de agosto de 1978** y el **28 de febrero de 2001** un total de **756,14 semanas** (fls.24/25).
3. Según la Historia Laboral de la actora (válida para bono) remitida por **Colfondos S.A.** a la demandante el **29 de enero de 2010**, contaba con **747.71 semanas** (fls.32/37).

4. En comunicado del **25 de noviembre de 2010**, **Colfondos S.A.** informó a la actora OBP había emitido su bono pensional, indicándose que el mismo había tenido en cuenta 747.71 semanas y tenía un valor de **\$27'177.375**, bono que fue aceptado por la demandante (fls.121/129).
5. El día **28 de junio de 2011**, la actora solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez (fl.133).
6. En oficio del **14 de octubre de 2011** dirigido a Beneficios Pensionales de **Colfondos S.A.** por parte del actuario Jesús Lisardo Barrios, se indicó que la actora no cuenta con un valor suficiente para financiar su pensión de vejez, sin embargo, desde el 19 de marzo de 2010 cumple con las condiciones para disfrutar de la garantía temporal de la pensión mínima, por contar con 57 años de edad y 1158 semanas cotizadas (fls.147/148).
7. Mediante comunicado del **14 de mayo de 2012**, dirigido a al Jefe de la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, **Colfondos S.A.** solicitó el reconocimiento de la garantía de pensión mínima en favor de su afiliada **María Gabriela Pérez**, toda vez que, evidenció que cumplía con las condiciones de edad y cotizaciones para acceder a la misma (fls.15/16).
8. El día **7 de junio de 2012**, la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó que se allegará los soportes de pago de los aportes en salud efectuados por la actora entre abril de 2005 y noviembre de 2007 (fl.160).
9. El día **2 de abril de 2013**, **Colfondos S.A.** solicitó a **Colpensiones** que actualizara la historia laboral de la señora **María Gabriela Pérez** ante la OBP (fl.132).
10. El día **9 de abril de 2013**, el **Ministerio de Hacienda y Crédito Público** depositó la suma de **\$17'454.000** por concepto de bono pensional (fl.161).
11. El día **17 de abril de 2013**, **Colfondos S.A.** le comunicó a la señora **María Gabriela Pérez** que no tenía derecho a la pensión de vejez solicitada (fls.163/164).
12. Según lo certificado expedido el por la **EPS Coomeva S.A.** el día **25 de septiembre de 2020** de prueba de oficio decretada por la Sala, la

actora efectuó cotizaciones en el régimen contributivo como trabajadora dependiente hasta el ciclo **julio de 2017** (fl.274).

13. Según se observa en Historia Laboral (válida para bono) expedida el **17 de agosto de 2018**, por la OBP, la actora cuenta con 761 semanas (fls.235/236).

A partir de los anteriores hechos procederá la Sala a resolver el problema jurídico puestos en su conocimiento:

Del cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de garantía mínima

Se solicitó con la demanda que se condenará a **Colfondos S.A.** al reconocimiento de la pensión de garantía mínima en favor de la demandante, pretensión que fue acogida por el juez de primera instancia, indicando que previó a su reconocimiento la actora deberá aprobar la liquidación del bono emitida por la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

A esta condena se opuso la apoderada de **Colfondos S.A.** argumentando que es necesario diferenciar entre dos prestaciones la pensión de vejez consagrada en el artículo 64 de la Ley 100 de 1993 que se reconoce con fundamento en los dineros contenidos en la cuenta de ahorro pensional del afiliado y que tiene como requisito la acumulación de capital y la garantía de pensión mínima que se reconoce a las personas que habiendo llegado a la edad de 62 años en el caso de hombres y 57 en el caso de mujeres, cumplen con un número de semanas cotizadas de 1150 y no tienen el capital suficiente para financiar su pensión.

En lo que respecta al caso de la demandante, resulta claro que ante la negativa de la AFP de reconocer la pensión de vejez del artículo 64, optó por la modalidad de garantía de la pensión mínima (fl.4), sin embargo, a esta petición se negó **Colfondos S.A.** aduciendo que la señora **Pérez** no cumple con el número de semanas necesarias.

Referente a la discusión acerca del cumplimiento de las **1150 semanas de cotización**, la prueba contenida en el expediente es abundante y clara, pues apenas basta sumar las **756,14 semanas** aportadas a **Colpensiones** (fl.24) con las **450,57 cotizadas** a **Colfondos S.A.** (fl.31) para concluir que la actora cuenta con **1206 semanas**, número superior al exigido en la norma.

Pero más allá de ello, en el evento de que se desconocieran las semanas cotizadas a **Colpensiones**, **Colfondos S.A.** en comunicado del **29 de enero de 2010** dirigido a la actora le adjunto la liquidación de su bono en el que se le

reconocían **747.71 semanas** y un valor de **\$27'177.375**, documento aceptado por la demandante en su momento (fls.121/129) y con el cual el número de semanas cotizadas asciende a **1198 semanas** con lo que supera el número exigido en la norma, por lo que no existen dudas en el sentido de que la señora **María Gabriela Pérez** cumple con los requisitos para acceder a la pensión de garantía mínima.

Pese a lo anterior, no se puede pasar por alto que de conformidad con el artículo 84 de la Ley 100 de 1993, vigente hasta el 24 de mayo de 2019, además de las condiciones de edad y cotizaciones, quien pretendiera acceder a una garantía estatal de pensión mínima, debía demostrar que no percibía remuneraciones superiores a las que recibiría por pensión.

En el caso bajo estudio, se observa del certificado expedido por **Coomeva EPS** que la señora **María Gabriela Pérez** mantuvo un contrato laboral vigente hasta el **mes de julio de 2017**, lo que implica que hasta ese momento percibió una remuneración por sus servicios, cumpliéndose la exigencia de la norma solo desde el **1 de agosto de 2017**, siendo esta la fecha desde la cual debe reconocerse la garantía de pensión mínima.

De la responsabilidad de los fondos de pensiones de tramitar el requerimiento de la garantía de pensión mínima ante la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

De conformidad con el inciso segundo del artículo 83 de la Ley 100 de 1993, corresponde a las administradoras de pensiones adelantar en nombre del pensionado, los trámites necesarios para que se hagan efectivas las garantías de pensión mínima.

En cumplimiento de este mandato **Colfondos S.A.** inició trámites para que fuera reconocida la garantía de pensión mínima (fls.15/16), los cuales declinó luego de que el **9 de abril de 2013**, el **Ministerio de Hacienda y Crédito Público** depositara la suma de **\$17'454.000** por concepto de bono pensional (fl.161) correspondiente a **646.85 semanas**, procediendo a comunicarle a su afiliada que no tenía derecho a la pensión de vejez solicitada e informándole que procedía la devolución de saldos (fls.163/164).

Una vez revisados estos hechos, se advierte en las actuaciones de las entidades demandadas un claro desconocimiento de los derechos de la señora **María Gabriela Pérez**, pues por un lado, está el proceder de la **OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público** que excluyó del bono pensional las semanas cotizadas en el periodo comprendido entre el mes de abril de 2005 y noviembre de 2007 dando aplicación en el año 2012 (fl.160) al artículo 3 del Decreto 510

de 2003, pasando por alto que esta norma había sido declarada nula por el Consejo de Estado desde el 6 de abril de 2011 en sentencia rad. 1687-07.

Del otro lado, esta una actitud pasiva de **Colfondos S.A.** que, ante la aplicación de esta norma y el desconocimiento de los derechos de su afiliada, pese a tener la legitimación legal para actuar en representación de esta conforme a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 100 de 1993, resolvió mantenerse estático, comunicándole a la señora **Pérez** que no tenía derecho a la pensión de vejez reclamada y que en su lugar podía optar por la devolución de saldos.

En lo referente a las obligaciones de las AFP de cara al trámite de la garantía de pensión mínima, es importante recordar lo enseñado por la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL-2735-2020, en la que se expresó:

No sobra precisar que la contribución que realiza el Estado a través de la oficina de Obligaciones Pensionales del Ministerio de Hacienda, es para el asegurado que, como el caso de la actora, no logró acumular el capital suficiente para financiar su pensión de vejez, siendo de responsabilidad de la entidad de seguridad social, como administradora del fondo pensiones del régimen de ahorro individual, el reconocimiento de ésta y no de dicho ente ministerial, pues, se insiste, es por conducto de esta entidad que el Estado aporta lo que hace falta a los asegurados para no ver truncada la garantía de vejez, pues es a eso a lo que se refieren los artículos 64 y 65 de la Ley 100 de 1993, lo que, se repite, no desdice de las funciones que competen al citado Ministerio.

En ese orden de ideas, encuentra la Sala que no pueden eludir las entidades demandadas las responsabilidades que a cada una de ellas corresponde en el reconocimiento de la garantía de pensión mínima, y es que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 142 de 2006 corresponde a la AFP iniciar los pagos mensuales de la respectiva pensión con cargo a la cuenta de ahorro individual de su afiliado y a la OBP del **Ministerio de Hacienda y Crédito Público** reconocer la garantía de pensión mínima, tomando las medidas necesarias para su reconocimiento y, si es el caso, apropiar las partidas necesarias para que la AFP, con cargo a los recursos de la Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad cancele la garantía de pensión mínima que se cause.

Así las cosas, se revocaran las órdenes impartidas en la para en su lugar: **Condenar a Colfondos S.A.** a reconocer y pagar la garantía de pensión mínima a la señora **María Gabriela Pérez** a partir del **1 de agosto de 2017** con cargo a las sumas contenidas en su cuenta de ahorro individual y al **Ministerio de Hacienda y Crédito Público** reconocer la garantía de pensión

mínima en favor de la demandante en los términos previstos en el artículo 3 del Decreto 142 de 2006.

Valor del retroactivo adeudado

Una vez determinado que a la actora le asiste derecho al reconocimiento y pago de la garantía de pensión mínima, se procede a determinar el valor que adeuda la **AFP Colfondos S.A.** por este concepto, encontrando que al haberse establecido que el pago se debe efectuar desde el **1 de agosto de 2017**, ciclo siguiente al de la última cotización en salud, el valor del retroactivo a pagar hasta el **31 de diciembre de 2020** asciende a la suma de **\$ 36’759.395**.

RETROACTIVO PENSIONAL				
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2017	4,09%	6	\$ 737.717	\$ 4’426.302
2018	3,18%	13	\$ 781.242	\$ 10’156.146
2019	3,80%	13	\$ 828.116	\$ 10’765.508
2020		13	\$ 877.803	\$ 11’411.439
			TOTAL	\$ 36’759.395

Obligatoriedad de las cotizaciones al sistema de salud a cargo de los pensionados

Unido al retroactivo pensional esta lo atinente a los descuentos en salud, los cuales por ministerio de la ley están a cargo de los pensionados, tal como lo indica el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, el cual dice de manera textual lo siguiente:

La cotización para salud establecida en el sistema general de salud para los pensionados está, en su totalidad, a cargo de éstos...

Frente al tema del principio de solidaridad que tienen los pensionados frente al sistema, ha tenido oportunidad de pronunciarse la Corte Constitucional, que en la sentencia C-126 de 2000, al declarar exequible el inciso segundo del artículo 143 de la Ley 100 de 1993.

Igualmente, esta ha sido una postura sostenida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral en varias sentencias, entre otras en SL-529 de 2020, donde se ha indicado que el pensionado está obligado a efectuar el respectivo aporte desde el momento en que ostenta tal calidad.

En este orden de ideas, se autorizará a **Colfondos S.A.** descontar del valor de las mesadas ordinarias¹ que integran el retroactivo, el porcentaje de las

¹ Lo anterior por cuanto no proceden descuentos en salud sobre las mesadas adicionales, de conformidad con el Decreto 1073 del año 2002.

cotizaciones en salud a cargo de la pensionada, valor que deberá a su vez trasladar a la EPS a la que se encuentre afiliada la actora.

Procedencia de los intereses moratorios

En lo que respecta a la imposición de intereses moratorios; condena cuya procedencia se reclama por parte del apoderado de la parte actora, encuentra la Sala que como se advirtiera al momento de analizar la responsabilidad de **Colfondos S.A.** incumplió esta administradora la obligación de gestionar en nombre de su afiliada el reconocimiento y pago del bono pensional, por lo que ante esta conducta, es procedente la condena al pago de los intereses moratorios, toda vez que, fue por una omisión imputable a la administradora de pensiones que la demandante no pudo comenzar a disfrutar de la garantía de pensión mínima.

En orden a lo anterior, y siguiendo lo establecido por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, se tiene que la reclamación pensional data del **28 de junio de 2011**, por lo que el tiempo con el que contaba **Colfondos S.A.** para responder venció **28 de octubre de 2011**, pese a ello conforme se pudo determinar con anterioridad el derecho a la pensión solo surgió el **1 de agosto de 2017**, los intereses solo resultan exigibles a partir del **1 de septiembre de 2017**, los cuales se causan frente a cada una de las mesadas atendiendo a la fecha de su exigibilidad y hasta el momento de su efectiva cancelación a la demandante.

Costas

Sin costas en esta instancia.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

CONFIRMAR la providencia de primera instancia dictada por el Juez Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, el día **10 de junio de 2019**, en el proceso ordinario laboral adelantado por la señora **MARÍA GABRIELA PÉREZ** contra **COLFONDOS S.A.** y la **NACIÓN-MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**, en cuanto declaró que a la demandante le asiste derecho a la garantía de pensión mínima de vejez;

REVOCÁNDOLA en cuanto a las órdenes impartidas las cuales quedaran de la siguiente forma:

PRIMERO: CONDENAR a COLFONDOS S.A. a reconocer y pagar la garantía de pensión mínima a la señora **MARÍA GABRIELA PÉREZ** a partir del **1 de agosto de 2017** con cargo a las sumas contenidas en su cuenta de ahorro individual, el valor del retroactivo adeudado entre la fecha de exigibilidad y el **31 de diciembre de 2020** asciende a la suma de \$ **36'759.395**.

A partir del **1 de enero de 2021** deberá **COLFONDOS S.A.** continuar reconociendo a la señora **MARÍA GABRIELA PÉREZ** una mesada equivalente al SMMLV para cada anualidad a razón de 13 mesadas por año.

Se autoriza a **COLFONDOS S.A.** descontar del valor de las mesadas ordinarias que integran el retroactivo, el porcentaje de las cotizaciones en salud a cargo de la pensionada, valor que deberá a su vez trasladar a la EPS a la que se encuentre afiliada la actora.

SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO a reconocer y pagar la garantía mínima de pensión de vejez en favor de la señora **MARÍA GABRIELA PÉREZ**.

TERCERO: CONDENAR a COLFONDOS S.A. a reconocer los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del **1 de septiembre de 2017**, los cuales se causan frente a cada una de las mesadas atendiendo a la fecha de su exigibilidad y hasta el momento de su efectiva cancelación a la demandante.

Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**.

LOS MAGISTRADOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ

CERTIFICO: Que el auto anterior fue notificado por **ESTADOS N° 015** fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín, **01 de febrero de 2021**

Secretario.